

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN se constituyó en audiencia, con el fin de resolver los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL** (en adelante UGPP) y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-016-2019-00148-01.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada MAYRENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.152.701.148, y con tarjeta profesional No. 331.069 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende se declare que es beneficiaria de la sustitución de la pensión convencional que gozaba su fallecido cónyuge ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, reconocida por la entonces CAJA AGRARIA y asumida por la UGPP, declarando la compatibilidad de esta pensión con la de vejez, que también

gozaba el referido difunto, del Sistema General de Pensiones reconocida por COLPENSIONES. Pretende el retroactivo pensional comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de mayo de 2018, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional antes referido, así como la indexación del reajuste de las mesadas causadas desde agosto y las que en lo sucesivo se causen.

De igual forma, pretende que se ordene a COLPENSIONES, seguir pagando la pensión de sobrevivientes o sustitución, que ya le fue reconocida mediante Resolución SUB 113651 del 27 de abril de 2018, en la cuantía allí establecida.

Como fundamento de sus pretensiones expuso la actora, que el 15 de febrero de 2018, murió por causas de origen común su cónyuge el señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO.

Aduce que el causante al momento del deceso, se encontraba disfrutando de la pensión de jubilación por convención colectiva otorgada mediante Resolución N°4645 del 13 de julio de 1982 por la entonces CAJA DE CRÉDITO AGRARIA, INDUSTRIAL Y MINERO, la cual fue reconocida en cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, por haber acreditado 20 años de servicio y 47 años de edad, requisitos que fueron establecidos en el artículo 34 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente a la fecha de retiro del causante en 1979.

Refiere, que a su cónyuge le fue reconocida por COLPENSIONES una pensión ordinaria de jubilación, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, es decir, que venía disfrutando de dos prestaciones compatibles, por provenir de dos fuentes de financiación diferentes.

Relata que COLPENSIONES mediante Resolución SUB 113651, le reconoció la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, en cuantía de \$781.242, y que la UGPP mediante Resolución RDP 010682 del 26 de marzo de 2018, ordenó de manera provisional el pago de una pensión de sobrevivientes, pero posteriormente, expidió la Resolución RDP 024829, modificando la mesada pensional por compartibilidad y ordenando el pago de un mayor valor de una pensión de vejez, invocando para ello el artículo 5 del Decreto 2879 de 1985, desconociendo con ello, que se trata de dos pensiones pagadas por entidades

distintas que nunca tuvieron el carácter de compartidas, razón por la cual considera que debe disfrutar de ambas.

Refiere, que la UGPP erradamente está analizando la situación aplicable al caso, sin tener en cuenta que el Decreto 2879 de 1985 y 758 de 1990, son normas expedidas con posterioridad a la fecha en que el señor MADRIGAL ACEVEDO causó su pensión de jubilación.

Finalmente, aduce que como el señor MADRIGAL ACEVEDO falleció el 15 de febrero, la UGPP no pagó ningún valor para dicho mes y por tanto, lo causado entre el 1 y el 14 de febrero, también debe ser pagado.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó desfavorablemente las pretensiones de la demanda incoadas contra COLPENSIONES, absolviendo a la entidad por considerar que la pensión que se reclama, ya fue reconocida administrativamente, de manera que no tenía sentido que la demandante hiciera comparecer al proceso a la AFP porque la pensión ya le había sido reconocida sin necesidad de declaratoria judicial.

De otro lado, declaró la compatibilidad de la pensión de sobrevivientes reconocida a la demandante que deviene de una pensión convencional otorgada por la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, por haber sido causada con anterioridad al 17 de octubre de 1985, la que consideró resultaba compatible con la pensión de sobrevivientes a cargo de COLPENSIONES de la que la demandante es beneficiaria, en consecuencia, condenó a la UGPP, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, en el 100% de la que devengaba el causante, a partir del 16 de febrero de 2018.

También condenó a la UGPP, a realizar los ajustes de la pensión y autorizó los descuentos en salud.

Para fulminar condena, adujo el juez de instancia que el Decreto 2849 de 1985, introdujo una modificación de compartibilidad de la pensión, por lo que para determinar si la pensión es compartible o no, se debe partir de la fecha de reconocimiento de la prestación y como en este caso la pensión convencional la otorgó la Caja de Crédito Industrial y Minero al causante el 6 de enero de 1979, por haber sido esta prestación causada con anterioridad al 17 de octubre de 1985, era

compatible con la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, condición que no podía ser modificada sino por la propia Convención Colectiva de Trabajo o un instrumento similar, no obstante, la Convención Colectiva aportada al expediente, no se observa un pacto de compartibilidad, luego, concluyó que la pensión es compatible con la del RPM.

Aunado a lo anterior, adujo el juez, que en este caso en vida del causante, ya se había proferido sentencia por parte del Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín el 02 de marzo de 1998, que indicó que la pensión de la Caja de Crédito Industrial y Minero, era compatible con la pensión del RPM, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín en providencia del 24 de agosto de 1999, razón por la cual consideraba que dichas decisiones afectaban la pensión de la hoy demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante.

Finalmente indicó el juez, que se abstenía de liquidar en concreto la prestación, toda vez que la prueba obrante en el plenario, no contiene la información suficiente para liquidar el retroactivo pensional, por lo que ordenó a la UGPP, pagar a la demandante el 100% de la pensión que en vida recibiendo el causante, realizando los ajustes necesarios para darle cumplimiento a dicha orden.

3. RECURSO DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada tanto por la demandante como por la UGPP, en los siguientes términos:

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.

La apoderada de la actora apela la sentencia, en cuanto absolvió a COLPENSIONES de las pretensiones de la demanda, por considerar que la fijación del litigio, consistía en establecer la compatibilidad de la pensión convencional a cargo de la UGPP, con la ordinaria a cargo de COLPENSIONES, lo que necesariamente implica que los efectos del fallo cobijan a dicha entidad, por eso considera que al momento del resolver el asunto, era necesaria la comparecencia de COLPENSIONES, por ser un litisconsorte necesario en el proceso, a pesar que no se hubiese comprobado en el trámite el incumplimiento de su obligación, afirmando incluso que el hecho de declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación, se podría interpretar como la no obligación de seguir haciendo el pago de la prestación que reconoció administrativamente, y de acuerdo a las consideraciones dadas por el Despacho, no hubiese sido entontes la falta de

legitimación en la causa por pasiva, excepción que ni siquiera fue propuesta por la entidad demandada en la contestación y que tampoco está llamada a prosperar.

Por lo anterior, considera que resulta desacertada la imposición de costas a cargo de la demandante y en favor de la demandada COLPENSIONES, pues si bien no hay una condena que le ordene pagar, lo cierto es que hay una obligación de hacer que se deriva de la declaración de compatibilidad entre las prestaciones.

En cuando a la no liquidación de la condena, también manifiesta inconformidad, pues aduce que el artículo 283 del Código General del Proceso, dispone que la misma debe hacerse en concreto, pues en el plenario se encuentra los elementos probatorios necesarios para liquidar.

En conclusión, solicita revocar el numeral primero de la sentencia, para en su lugar, declarar que COLPENSIONES está obligada a seguir pagando la pensión reconocida a la señora MARÍA IRENE ZAPATA DE MADRIGAL. También solicita adicionar el numeral tercero de la sentencia, en el sentido de liquidar lo adeudado por la UGPP hasta la fecha y ordenar el pago de lo que en lo sucesivo se cause y finalmente, revocar parcialmente el numeral quinto de la sentencia, en el sentido de las costas impuestas a la demandante en favor de COLPENSIONES y en su lugar, no condenar en costas a la demandante.

APELACIÓN UGPP.

La apoderada de la UGPP recurre la sentencia de instancia, por considerar que según el artículo 5 del Decreto 2879 de 1985, los patronos registrados como tales en el ISS que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convenciones colectivas, pactos colectivos, laudo arbitral o voluntario, causada a partir del 17 de octubre de 1985, continuaran cotizando para el seguro de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en ese momento, el ISS procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el ISS y la que venía cancelando al pensionado.

Indica que el párrafo del artículo mencionado, señala que lo dispuesto en ese artículo no se aplicaría cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto

expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el ISS.

Alega que por su parte, el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, señala igualmente que los patronos inscritos en el ISS, a partir de la publicación de dicho decreto, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convenciones colectivas, pactos colectivos, laudo arbitral o voluntariamente, continuaran cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el ISS para otorgar la pensión de vejez y en ese momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el ISS y la que venía siendo pagada por el patrono.

Aduce que por lo anterior, queda a cargo del FOPEP, pagar únicamente el mayor valor si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el ISS y/o COLPENSIONES, y la que venía cancelando la entidad patronal a partir del 16 de febrero de 2018, día siguiente al fallecimiento del causante.

Expresa que conforme a la normativa en cita, considera que la prestación reconocida por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en calidad de empleador, mediante la Resolución N°4645 del 13 de julio de 1982, tenía la vocación de ser compartida con la pensión de vejez a cargo del ISS, hoy COLPENSIONES, conforme al artículo 18 del Decreto 758 de 1990, disponiendo que se pagaría a cargo del ISS empleador hoy UGPP, hasta cuando se reconociera la pensión de vejez por parte del asegurador hoy COLPENSIONES, y a partir de ese momento el ISS debe proceder a cubrir dicha pensión siendo a cargo de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy UGPP pagar únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el ISS asegurador hoy COLPENSIONES y la que venía siendo pagada por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. El ISS hoy COLPENSIONES, través de la Resolución N°14305 del 01 de enero de 2000, resuelve una solicitud de prestaciones económicas, en consecuencia, reconoció una pensión de vejez de carácter compartida a favor del causante, efectiva a partir del 06 de enero de 1992.

Manifiesta que a través de la Resolución RDP 20425 del 05 de junio de 2018, la UGPP reconoció de manera definitiva una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor ENRIQUE DE JESÚS, a favor de la señora MARÍA IRENE, en calidad de cónyuge o compañera, en porcentaje del 100% a partir del 16

de febrero de 2018, día siguiente al fallecimiento, y a través de la Resolución RDP 024829 del 27 de junio de 2018, la UGPP ajusta la mesada pensional en el mayor valor a cargo del FOPEP de la pensión de jubilación reconocida a favor del señor ENRIQUE DE JESÚS, a partir del 16 de febrero de 2018, día siguiente al fallecimiento del causante y el valor de la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES y sustituida a favor de la misma beneficiaria mediante la Resolución SUB 113651 del 27 de abril de 2018, a partir del 15 de febrero de 2018.

Refiere que a manera de ejemplo se cita la sentencia T-624 de 2006, donde se dispuso respecto a la figura de la compartibilidad, que el momento de la pensión que viene percibiendo el asegurado, no sufre variación alguna en razón a la compartibilidad pensional, es decir, no se incrementa ni se disminuye, puesto que el ISS subroga a la entidad jubilante en su obligación pensional, siendo de cargo de dicha entidad solamente el mayor valor si lo hubiere, con lo cual se evita un doble pago respecto de un mismo y único derecho pensional, y además, si el monto de la pensión de vejez reconocida por el ISS es igual o mayor a la pensión pagada hasta ese momento por el empleador, el ISS se subroga en la totalidad de dicha obligación y el empleador se libera de la misma.

Por todo lo anterior, solicita a esta magistratura que se revoque la sentencia impugnada y que en su lugar se profiera la que en derecho corresponde.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, todos los apoderados de las partes presentaron escrito de alegatos, en los que anotan resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

Sea lo primero, solicitar, desestimar los argumentos expuestos por la apoderada de la UGPP en el recurso de apelación y en los alegatos que presenta en esta instancia.

Ahora bien, dispuso el a-quo en el numeral primero de la parte resolutive lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar probada en favor de Colpensiones la excepción que denominó Inexistencia de la obligación por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (...).

Las consideraciones que señaló el Juez de primera instancia en la providencia indican que la Entidad fue llamada innecesariamente al proceso, como quiera que no se encontraba incumpliendo ninguna obligación.

Por lo que reitero mi inconformidad con dicha conclusión, y la cual se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 61 del Código General del Proceso, el cual reza:

ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

Ahora bien, si en gracia de discusión, la Entidad demandada no fuese litisconsorte necesario, y fuera a lo sumo litisconsorte cuasinecesario, entendido este como aquel que no es obligatoria su comparecencia y aunque no participe o no haya sido citado, los efectos de la sentencia lo cobija, en todo caso no se podría declarar la inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de sobrevivientes, pues dicha obligación existe y continuará existiendo como quiera que lo que se declara es la COMPATIBILIDAD entre la prestación que viene pagando y la que debe reconocer y pagar la otra demandada.

Por su parte el numeral tercero, que se ataca parcialmente, señala:

“TERCERO: Condenar a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reconocer y pagar a la señora MARIA IRENE ZAPATA DE MADRIGAL pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su cónyuge ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO en el 100% de la pensión de vejez que en vida recibía el causante, a partir del día 16 de febrero del año 2018.”

Frente a este numeral el reparo se centra en la no liquidación de la condena, por lo que reitero, a diferencia de lo considerado por el juez, si se encuentran los elementos probatorio necesarios para liquidar la misma, es decir, se tiene certeza de la fecha del fallecimiento del causante, 15 de febrero de 2018 que es la fecha del reconocimiento a mi mandante, se tiene certeza del valor reconocido inicialmente por la UGPP, para 2018 la cuantía es \$1.426.768, se encuentra probado el valor pagado por la Administradora Colombiana de Pensiones, para 2018 corresponde al salario mínimo \$781.242 y reposan, de conformidad con la resolución emitida por la UGPP se conoce que procedió a pagar la diferencia (1.246.768 – 781.242) y que

como lo indicó el juez de instancia, a folio 100 del expediente, se encuentran los valores pagados por la UGPP, que en todo caso no corresponde al valor completo de la mesada, pues ello corresponde a las diferencias ocasionadas desde la causación del derecho para mi mandante; por lo tanto es posible establecer la diferencia entre lo que debió pagar y lo pagado para determinar la cuantía ordenada y no dejar a criterio de la entidad dicha liquidación.

Inconformidad que se sustenta en el artículo 283 del Código General del Proceso:

ARTÍCULO 283. CONDENA EN CONCRETO. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.

Es decir, que frente a este numeral se solicita cuantificar la condena y en lo demás se solicita su confirmación.

Del numeral quinto, que parcialmente se ataca y que dispuso:

“QUINTO: Se condena en costas a la parte demandante y en favor de Colpensiones, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 (...).”

Dado que se ataca el numeral primero de la sentencia, en consecuencia, se ataca también parcialmente el numeral quinto, en lo relacionado con las costas impuestas en favor de Colpensiones y en contra de la demandante, en lo demás, esto es, las costas impuestas a la UGPP en favor de la demandante, solicito sean confirmadas.

Resulta desacertada la imposición de costas a cargo de la demandante y en favor de la demandada Colpensiones, porque ninguna de las excepciones propuestas por la entidad en la contestación de la demanda, están llamadas a prosperar, pues reitero, resulta completamente desacertado declarar que no existe obligación de pagar dicha prestación, pues dicha obligación se mantiene, dada la declaratoria de COMPATIBILIDAD de las prestaciones.”

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

“Para el caso en cuestión, acierta el Juez de primera instancia al declarar como probada la excepción propuesta por Colpensiones, la cual sugiere la inexistencia de obligación por parte de la entidad de reconocer y pagar la pensión de sobreviviente, por cuanto Colpensiones mediante Resolución SUB 113651 del 27 de abril de 2018 había reconocido la prestación económica y se encontraba realizando los pagos de

la mesada con regularidad, sin que se presentara mora en el pago, por tanto tampoco procedían los intereses de que trata el artículo 141 de Ley de 1993.

Es por lo anteriormente expuesto que se concluye que se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva, tal como ya lo han explicado ampliamente la jurisprudencia, la legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación del demandante sobre una pretensión de contenido material. En este proceso se evidencia que las pretensiones debían estar dirigidas a la UGPP y no a Colpensiones, como erróneamente lo formuló la demandante, es por ello que además es procedente la condena en costas a cargo de la demandante y en favor de Colpensiones.

La demandante no tenía causa que la legitimara a demandar a la entidad que represento, pues no se le estaba negando ningún derecho ni incumpliendo obligaciones, en consecuencia, se solicita que en segunda instancia se confirme la sentencia de primera.

ALEGATOS DE LA UGPP.

Es claro que se deberá revocar la sentencia impugnada y en su lugar negar las pretensiones del demandante en atención a que la Resolución No. 4645 del 13 de julio de 1982, tenía la vocación de ser compartida con la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales Asegurador hoy Colpensiones, conforme al artículo 18 del Decreto 758 de 1990, disponiendo que se pagaría a cargo del ISS empleador hoy UGPP, hasta cuando se reconociera la pensión de vejez por parte del asegurador hoy Colpensiones y a partir de éste momento el ISS debe proceder a cubrir dicha pensión siendo a cargo de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hoy UGPP pagar únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el ISS ASEGURADOR hoy COLPENSIONES y la que venía siendo pagada por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.

La Resolución SUB 113651 de 27 de abril de 2018 señala en su parte resolutive lo siguiente:

“PARAGRAFO: En el evento que exista sumas pendientes por cancelar correspondientes a retroactivos derivados del reconocimiento pensional efectuado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, estos deberán ser cobrados directamente a esa entidad, para la cual se remitirá al área competente para el cobro correspondiente”

En referencia al tema discutido respecto a la compatibilidad se deberá tener en cuenta que desde la carta de 1886 (art. 64) se había consagrado la prohibición de recibir simultáneamente dos asignaciones del Tesoro Público, de empresas o de instituciones en que tuviera parte principal el Estado, salvo las excepciones contempladas en la ley, limitaciones que igualmente están consagradas en el artículo 128 de la Constitución Política de 1991.

Ahora bien, la norma de 1886 precitada, fue desarrollada entre otros por el decreto 1713 de 1960, quien en su artículo primero dispuso:

“Artículo 1º Nadie podrá recibir , más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:

Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo;

Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos.

Las que provengan de pensión de jubilación y de servicios de cargos públicos, siempre que el valor conjunto de la pensión y el sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de mil doscientos pesos (\$1.200.00) mensuales.

Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las Fuerzas Armadas.

Parágrafo. Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se entiende por honorario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 128 de la Constitución de 1991, señalo:

“nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoría del estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

La ley 269 de 1996 expone:

ARTÍCULO 1o. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Ley se aplica a todo el personal de salud que cumpla en forma directa funciones de carácter asistencial en entidades prestadoras de servicios de salud, sin perjuicio del sistema de salud que se rija.

ARTÍCULO 2o. GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD. Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, y en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el personal asistencial que preste directamente

servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público.

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará los incentivos salariales y no salariales establecidos en el artículo 193 de la Ley 100 de 1993, con el fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores oficiales y empleados públicos de la salud y su localización en las regiones con mayores necesidades, facilitar la consecución del recurso humano en aquellos sitios apartados de la geografía nacional o definidos como zonas de orden público, donde no se disponga de personal de salud para la prestación del servicio.

ARTÍCULO 3o. CONCURRENCIA DE HORARIOS. Prohíbese la concurrencia de horarios, con excepción de las actividades de carácter docente asistencial que se realicen en las mismas instituciones en las cuales se encuentre vinculado el profesional de la salud, y que por la naturaleza de sus funciones, ejerza la docencia y la prestación directa de servicios de salud.

Por su parte, el artículo 19 de la ley 4 de 1992, indico: “ nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado”

Para efectos de entrar a estudiar el pago de una doble asignación del Tesoro Público es necesario exponer, la sentencia T-066 de 2010, de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional:

“Alcance del artículo 128 de la Constitución Política.

La constitución política en su artículo 128 prevé:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provengan del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

La evolución normativa de la anterior prohibición tiene como referente la Constitución Política de 1886, que en el artículo 64 prescribía: nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público, salvo para los casos especiales que determinen las leyes. Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos (texto del acta de la Comisión Octava del Senado correspondiente a la sesión del día 14 de noviembre de 1935), obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, si se les permitía la acumulación de cargos y, por ende, de sueldos.

Razones de moralidad de la administración y del poder público llevaron a la modificación del texto anterior, mediante la expedición el acto administrativo No. 1 de 1936, cuyo artículo 23 reformo expresamente el artículo 64 de la carta de 1886, en el sentido de cambiar el termino de sueldo por el de asignación con el fin de incluir allí toda clase de remuneraciones, emolumentos, honorarios, mesadas pensionales, etc. Que pudieron percibirse con cargo de erario público. Este articulo también amplio el campo de coberturas de la disposición y extendió su aplicación a las empresas o instituciones en que tenga parte principal el estado. Así mismo, preciso el significado y alcance de la expresión tesoro público en el sentido de comprender el tesoro de la nación, los departamentos y los municipios; sin embargo, dejo incólume la parte de la norma que autorizaba a la ley para señalar excepciones a dicha regla general.

La Constitución de 1991 conserva este mandato en su integridad, y le agrega la prohibición de que cualquier persona desempeñe más de un cargo público. También adecua el texto del mandato a la nueva normativa, y extiende la definición de tesoro público al patrimonio de las entidades descentralizadas (artículo 128 superior).

El artículo 128 consagra una clara incompatibilidad, estrechamente relacionada con la remuneración de los servidores estatales; en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, así como la recepción de, más de una asignación que provenga del erario público.

El desarrollo de jurisprudencia del término “asignación”, se extracta de los siguientes precedentes. Según la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia:

“Puede afirmarse que el vocablo “asignación” es un término genérico que comprende las sumas provenientes del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, percibida por los servidores públicos –sin excepciones, dado que la expresión “nadie” no excluye a ninguno de ellos-, por concepto de remuneración, consista esta en salario o prestaciones, honorarios o cualquier otro emolumento o retribución, salvo aquellas exceptuadas de forma expresa.

Bajo el vocablo asignación queda comprendida toda remuneración que se revista en forma periódica, mientras se desempeñan una función.”

Igualmente, la corte constitucional, en sentencia c-133 de 1993, sostiene el término “asignación” comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional etc.

Se deduce entonces, que el bien jurídico tutelado por los artículos 128 de la C.P y el 19 de la ley 4º de 1992, que la desarrolla, es la moralidad administrativa, considerada en el ámbito propio de la función pública y. por tanto, la asignación –comprendida como toda remuneración, sueldo, honorarios, mesada pensional, - recibida de forma periódica, deberá entenderse respecto de quienes desempeñan empleos públicos.”

Teniendo en cuenta lo anterior y frente a la Incompatibilidad entre pensiones ordinarias antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 podemos decir:

Primera Regla: El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia confluían en señalar que el ISS era un mero administrador de dineros de índole privada, que aportaran asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos; por

consiguiente las pensiones que el ISS otorgaba no provienen del Tesoro público, y por ende son compatibles con las pensiones que se otorgaran en virtud a los servicios prestados al sector público.

Segunda regla: Únicamente son compatibles dos pensiones de vejez si ambas son causadas con anterioridad al 1 de abril de 1994, siempre y cuando de ellas sea reconocida por el ISS por cotizaciones realizadas sector privado y la otra pensión por un Fondo o Caja el sector público por el tiempo de servicios prestados a entidades públicas, no imputando en ninguno de los casos las mismas cotizaciones.

Es claro, como se ha venido sustentando, que el artículo 128 superior prohíbe a cualquier persona percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, la cual está directamente relacionada con el hecho que ambos emolumentos tengan como fuente de origen o financiación el ejercicio de empleos o cargos públicos, bien sea como empleos públicos simultáneos o a consecuencia de reconocimientos pensionales a cargo del estado o cuyo pago provenga del tesoro público, caso en el cual se encuentra el señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO , toda vez que el Instituto de Seguros Sociales asegurador reconoció a su favor una pensión de vejez teniendo en cuenta tiempos de servicio público para el reconocimiento de la pensión, situación que lo hacen Beneficiario de dos pensiones a cargo del Estado y que abiertamente se aparta de lo establecido en el artículo 128 ibídem.

Por lo tanto, solicito se revoque la sentencia impugnada y se profiera la que en derecho corresponda.

5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico a dilucidar se circunscribe a establecer si la pensión de sobrevivientes, que le fue otorgada administrativamente a la demandante por parte de COLPENSIONES, es compatible con la de sobrevivientes reconocida por la UGPP. En caso positivo, se analizará si es procedente liquidar la condena en concreto como lo solicita la parte actora.

De otro lado, se analizará si es legalmente viable que la demandante llame a juicio a COLPENSIONES, para que se declare que la entidad debe seguir reconociendo la pensión de sobrevivientes, cuando dicha AFP ya reconoció administrativamente el derecho reclamado y si como consecuencia de ello, procede la condena en costas procesales, y a cargo de quién están las mismas.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES

En principio debería la Sala ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia..., deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*, sin embargo, no podemos olvidar que el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, impone consultar las sentencias en las que la Nación sea garante de la condena, por lo que atendiendo la jurisprudencia de la SCL de la H. CSJ sobre la consulta de las sentencias en favor de COLPENSIONES, al considerar a la nación garante del pago de las pensiones, se considera igualmente en este caso a la Nación garante del pago de las pensiones a cargo de la UGPP, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

En el proceso no se discute y además se encuentra probado lo siguiente:

- Que el señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO fue pensionado por parte de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, mediante Resolución 4645 del 13 de julio de 1982, en cuantía inicial de \$13.362.33. (Folio 27 a 29 del expediente digital)
- Que mediante Resolución 14305 del 23 de octubre de 2000, el ISS hoy COLPENSIONES, reconoce pensión de vejez al señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, a partir del 06 de enero de 1992, en cuantía del salario mínimo legal. (Folio 91 a 94 del expediente digital)
- Que a través de Resolución SUB 113651 del 27 de abril de 2018, COLPENSIONES otorga a la demandante MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, a partir del 15 de febrero de 2018, en cuantía de un salario mínimo legal. (Folio 96 a 98 del expediente digital)

- Que mediante Resolución RDP 02425 del 05 de junio de 2018, la UGPP reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL como beneficiaria del señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, a partir del 16 de febrero de 2018, en la misma cuantía devengada por el causante. (Folio 102 a 105 del expediente digital)
- Que por medio de la Resolución RDP 024829 del 27 de junio de 2018, la UGPP ordena ajustar la mesada pensional de la demandante, en el sentido de pagar solo el mayor valor a cargo del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS -FOPEP-, de la pensión de jubilación reconocida al causante y sustituida por la señora MARÍA IRENE, mediante la Resolución RDP 20425 del 05 de junio de 2018, a partir del 16 de febrero de 2018, día siguiente al fallecimiento del causante y el valor de la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES y sustituida en favor de la demandante mediante Resolución SUB 113651 del 27 de abril de 2018, a partir del 15 de febrero de 2018.

Ahora bien, para resolver en primer lugar la apelación presentada por la UGPP referente a la compartibilidad o compatibilidad de la pensión de sobrevivientes que solicita la demandante, debe decirse que antes de la creación del ISS, las pensiones de jubilación eran reconocidas y pagadas por los empleadores de conformidad con el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo o bajo las condiciones establecidas en la Ley o en convenciones colectivas, pactos colectivos o laudos arbitrales, por lo que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 3041 de 1966, normativa que aprobó el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, el ISS asumió el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez de carácter legal.

Lo anterior da cuenta que inicialmente no se reguló lo atinente a las pensiones de jubilación convencionales, por lo que se permitió la coexistencia de las pensiones de vejez o legales y las convencionales de jubilación o extralegales, de ahí deviene lo que se llamó compatibilidad pensional. No obstante, con la expedición del Decreto 2879 de 1985, se pretendió armonizar las pensiones convencionales con las legales otorgadas por el ISS, y a partir de ese momento se instituyó la figura de la compartibilidad pensional.

En relación con lo anterior, frente a la aplicabilidad de una u otra figura, el Decreto 2879 de 1985, estableció que la compartibilidad sería aplicable a partir de la fecha de su expedición, esto es, 17 de octubre de 1985, salvo que en el laudo arbitral,

pacto o convención colectiva en el que se reconoció el derecho de los trabajadores a la pensión de jubilación, se hubiera establecido expresamente que dicha pensión no sería compartida con el ISS, de manera que la compatibilidad y la compartibilidad pensional tiene efectos jurídicos distintos y su aplicabilidad depende del momento en que la pensión de jubilación de carácter convencional fue reconocida por parte del empleador al pensionado, así como de los acuerdos entre las partes.

En conclusión, la compatibilidad de las pensiones de vejez y de jubilación convencional, le otorga el derecho al pensionado a percibir de manera simultánea ambas prestaciones de manera integral, mientras que la compartibilidad de las pensiones, regula las situaciones en las que a un trabajador que recibe una pensión de jubilación concedida con posterioridad al 17 de octubre de 1985, le es reconocida una pensión legal o de vejez, lo que trae como consecuencia que, desde el momento en que el ISS o Colpensiones reconoce la pensión de vejez, el empleador se subroga en su obligación de pagar la pensión extralegal, quedando a su cargo únicamente la diferencia entre la pensión de jubilación y la de vejez, cuando la primera es de mayor valor que la última.

Frente a este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL889-2021, indicó:

“El citado acuerdo lo aprobó el Decreto 2879 de 1985, el cual entró en vigencia el 17 de octubre de igual año. Así, la Sala ha adoctrinado de forma pacífica y uniforme que las pensiones de origen extralegal causadas antes de dicha calenda, por regla general, son compatibles con las que reconozca el ISS y, contrario sensu, serán compartidas con el referido instituto si se causan después de tal data y no existe pacto expreso en contrario (CSJ SL 18144, 10 sep. 2002; CSJ SL 24938, 30 jun. 2005; CSJ SL 27311, 15 jun. 2006; CSJ SL 35281, 9 sep. 2009, CSJ SL 45403, 8 may. 2013, CSJ SL6114-2014, CSJ SL1688-2017 y CSJ SL7104-2017).”

En el caso de marras, conforme quedó anotado anteriormente, el señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO fue pensionado por parte de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, mediante Resolución 4645 del 13 de julio de 1982, es decir, antes del 17 de octubre de 1985, sin que hubiera sido alegado o demostrado por la UGPP demandada en este proceso, un acuerdo de voluntades contenido en la Convención Colectiva de Trabajo en virtud de la cual se entendiera que la pensión que viene siendo pagada por la entidad, tuviera el carácter de compartida con la de vejez a cargo del ISS, ya que la Convención aportada al proceso suscrita 01 de marzo de 1976 entre la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO BASE DE LA MISMA, en el artículo 34 solo consagró la pensión de jubilación, pero no hizo ninguna salvedad

respecto de la compartibilidad con el ISS (folios 37 a 75 del expediente digital de primera instancia), de manera que la compartibilidad pensional con anterioridad al 17 de octubre de 1985, solamente podía ser desvirtuada por acuerdo expreso entre las partes celebrado en la convención colectiva de trabajo aplicable, cosa que no quedó demostrada, por lo que no queda otro camino que CONFIRMAR la decisión de primer grado, en el sentido que la UGPP, debe seguir reconociendo a la demandante, el 100% de la pensión que venía reconociendo a su esposo fallecido.

Ahora en los alegatos de la UGPP se mencionan una serie de disposiciones legales, referentes a la incompatibilidad de las pensiones, su mayoría con vigencia posterior al año 1985 por lo que no son aplicables al caso que nos ocupa, pues la pensión convencional fue reconocida en el año 1979.

De otra parte, respecto de la prohibición del artículo 128 de la Constitución de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, en múltiples Sentencia como en la SL2261-2022, Radicación n.º 90751 del 15 de junio de 2022, la CSJ se ha pronunciado en el sentido que tal prohibición no aplica, respecto de las pensiones pagadas por el ISS hoy COLPENSIONES, toda vez que los recursos con que estas se pagan, no pertenecen a la Nación, ni a esta entidad pues solo los administra.

En cuando a la solicitud elevada por la parte demandante de liquidar la condena en concreto, ya que el juez de instancia consideró que en el plenario no existían elementos suficientes para proferir condena, a juico de la Sala la condena de la forma como fue impuesta, es en concreto, pues se dispuso:

“TERCERO: Condenar a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a reconocer y pagar a la señora MARIA IRENE ZAPATA DE MADRIGAL pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su cónyuge ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO en el 100% de la pensión de vejez que en vida recibía el causante, a partir del día 16 de febrero del año 2018.”

Ahora el hecho que no se haya precisado el monto de la pensión y el retroactivo pensional al que tenga derecho la actora no implica que no haya una sentencia en concreto como se afirma en la apelación de la actora, pues para que la haya no se requiere que existan cifras concretas, sino que se pueda determinar con toda precisión la liquidación de las condenas, lo que se cumple con la forma como el *a quo* ordenó liquidar la pensión.

Al respecto se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la CSJ en la sentencia SL391-2020, Radicación n.º 72057 del 10 de febrero de 2020 en la que se rememora otras anteriores en el mismo sentido, en la que se anotó lo siguiente:

“Por tanto, como en el proceso no existe acreditación que haya sobrevenido la finalización del vínculo contractual, que al momento de la presentación de la demanda, se encontraba vigente, conforme se lee en el primer hecho del gestor y su réplica (f.º 1 y 327, *ibidem*), bastaba con condenar a la demanda al reconocimiento y pago de la pensión convencional, con base en el 75 % de lo devengado en el último año de servicios, a partir del momento que el trabajador se desvinculara del servicio; motivo por el cual, se modificará el ordinal segundo del fallo.

Lo último, no constituye una condena en abstracto, como lo justificó el Juez de primer grado, para cuantificar la prestación, en relación con lo devengado en el 2011, porque en todo caso la condena sería liquidable.

Así lo definió la Sala, en la sentencia CSJ SL472-2018, al rememorar lo plasmado en la sentencia CSJ SL, 28 en. 2004, rad. 20561, reiterada en la CSJ SL, 9 mar. 2005, rad. 23485, donde orientó:

La verificación de si un fallo cumple con la exigencia del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil sobre condena en concreto, tiene necesariamente que tener en cuenta lo consagrado en el artículo 491 ibidem en cuanto define que debe entenderse por suma líquida no sólo la expresada en una cifra numérica precisa sino la que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas.

De suerte, que aunque resulta deseable y de la mayor conveniencia que las sentencias laborales condenen por una cifra precisa y exacta, el hecho de que en algunas ocasiones su cuantificación haga necesaria la realización de algunas operaciones matemáticas para efectos de concretarla no es óbice para que se califique la providencia de abstracta e imprecisa, siempre que los parámetros para la liquidación aparezcan claramente determinados e identificados en el fallo respectivo”

No obstante en consulta de la sentencia en favor de la UGPP, es menester modificar tal condena, pues se podría entender que esta entidad debe pagar la pensión a la actora en el 100% de la convencional que en vida recibía el causante, a partir del día 16 de febrero del año 2018, desconociendo pagos que ya se le realizaron a la demandante parcialmente en esta forma, y pagos parciales que también ya se le han realizado del mayor valor de la pensión de jubilación que entendió la UGPP era como lo debía realizar.

El señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, en vida fue pensionado por parte de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, en cuantía inicial de \$13.362.33, mediante Resolución 4645 del 13 de julio de 1982, a partir del 06 de enero de 1979.

La UGPP profiere la Resolución RDP 020425 del 05 de junio de 2018, mediante la cual reconoce la pensión de sobrevivientes a la señora MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL a partir del 16 de febrero de 2018, en la misma cuantía devengada por

el causante. Si bien dicha Resolución no dice a cuánto ascendía el valor de la mesada pensional, lo cierto es que en el plenario reposa prueba de los Cupones de Pago del Consorcio FOPEP, que dan cuenta que para el mes de junio de 2018, lo pagado a la demandante por sustitución pensional ascendía a \$1'426.768, mesada pensional que le fue pagada hasta julio de 2018 (folios 125 y 126 del expediente digital), no obstante, también se aprecia la Resolución RDP 024829 del 27 de junio de 2018, mediante la cual la UGPP ordena ajustar la mesada pensional de la demandante, en el sentido de pagar únicamente el mayor valor de la pensión de jubilación, sin decir la mencionada Resolución a cuánto ascendía dicho valor. Es por ello que el cupón de pago del mes de agosto de 2018, da cuenta que la sustitución pensional asciende a \$645.526.38 (Folio 127 del expediente digital).

Ahora, si bien la citada Resolución RDP 024829 del 27 de junio de 2018, en el artículo tercero de la parte resolutive, señaló que el valor de las mesadas cobradas de más por el pensionado entre el 15 de febrero de 2018 y la fecha de inclusión en nómina, en la cuantía que determinaría la Subdirección de Nómina, debía ser reintegrada por la señora ZAPATA DE MADRIGAL, quien para tal efecto, debía autorizar los descuentos respectivos sobre la mesada pensional a cargo del FOPEP, pues en caso contrario, se remitiría al área competente para el cobro.

También se puede apreciar en el cupón de pago del mes de agosto de 2018, que hay un reintegro a la Nación por mayores valores pagados por valor de \$1'278.034, pero en la misma nómina, se aprecia un pago adicional de \$2'259.342.33 como pago de retroactivo del 12%. De igual forma, el cupón de pago del mes de septiembre de 2018, obrante a folio 128 del expediente digital, da cuenta del pago de una mesada de \$645.526 y de un reintegro a la Nación por mayores valores pagados en el monto de \$284.013, sin que se hayan aportado las colillas de pago de los meses restantes o anteriores a los ya indicados.

De esta manera, en esta instancia, se liquidará el retroactivo de la pensión al que tiene derecho la demandante desde el 16 de febrero del año 2018 y hasta el 31 de marzo de 2023, del que se ordenara descontar todo pago que se le haya realizado a la actora, en este lapso, por concepto de cancelación de la pensión convencional que gozaba su fallecido esposo y que se le sustituye. La liquidación es la siguiente:

LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	Valor Mesada	# Mesadas	Total retroactivo en
2018	3,18%	\$ 1.426.768	12 Mesadas y 16 días	\$ 17.882.159
2019	3,80%	\$ 1.472.139	14 Mesadas	\$ 20.609.949

2020	1,61%	\$ 1.528.081	14 Mesadas	\$ 21.393.127
2021	5,62%	\$ 1.552.683	14 Mesadas	\$ 21.737.557
2022	13,12%	\$ 1.639.943	14 Mesadas	\$ 22.959.207
2023		\$ 1.855.104	3 Mesadas	\$ 5.565.312
TOTAL				\$ 110.147.311

Del anterior monto del retroactivo, como ya se anotó, se descontará a la actora, todo pago que se le haya realizado, por concepto de cancelación de la pensión convencional que gozaba su fallecido esposo y que se le sustituye.

En lo que tiene que ver con la apelación de la actora, en el sentido que se declare que COLPENSIONES está obligada a seguir pagando la pensión reconocida administrativamente, considera la Sala que la decisión del *a quo* está ajustada a derecho, pues ninguna razón le asistía a la demandante para llamar a juicio a la COLPENSIONES, quien no solo reconoció administrativamente la pensión de sobrevivientes a la señora MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL, por el fallecimiento del señor ENRIQUE DE JESÚS MADRIGAL ACEVEDO, sino que además no se aduce incumplimiento de su parte, ni falta de pago de la entidad, de manera que no existe ningún conflicto jurídico que amerite pronunciamiento o convalidación por parte de la judicatura, ya que la declaratoria de compatibilidad que se hace en este proceso, es respecto de la pensión de sobrevivientes que dejó de pagar de manera completa la UGPP, pues se itera, respecto de la pensión que le ha venido siendo reconocida por COLPENSIONES, no existe conflicto alguno que deba resolver la justicia, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia en este aspecto.

En lo concerniente a la condena en costas de la cual solicita la parte demandante su absolución, debemos remitirnos a la norma legal que a la fecha de la sentencia de primera instancia reglaba lo referente a la condena en costas, la cual es el Artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al proceso laboral por remisión que a él efectúa el artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que dispone que: *“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”*

La anterior norma legal, dispone que se condena en costas a la parte que controvierte en el proceso y que sea vencida. Así las cosas, como administrativamente COLPENSIONES reconoció la pensión de sobrevivientes a la

demandante y no tenía por qué ser llamada a juicio, este hecho genera la imposición de las costas procesales, por lo que resulta atinada la decisión del juez de instancia de condenar en costas a la demandante en favor de COLPENSIONES, debiéndose CONFIRMAR la sentencia en este aspecto.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por la UGPP al dar respuesta a la demanda, en lo que en lo que atañe con este medio exceptivo, se ha de tener en cuenta lo consagrado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, el cuál dispone un término de 3 años para que los derechos no se vean afectados por este medio extintivo, sin que pueda operar en este caso pues el causante falleció el 16 de febrero del año 2018 y la demanda fue presentada en el año 2019.

En conclusión, se confirmará la sentencia de primera instancia, con la modificación ya anunciada.

COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES, por habérsele resuelto desfavorable el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

También se codena en costas a la UGPP y a favor de la demandante por haber sido vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 11 de junio de 2020 proferida por el JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA IRENE ZAPATA MADRIGAL** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL -UGPP-** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-**, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, MODIFICÁNDOLA en el sentido que el retroactivo pensional al que tiene derecho la

demandante causado entre el 16 de febrero del año 2018 y hasta el 31 de marzo de 2023, es el que se indica en la tabla de la parte motiva de este sentencia de segunda instancia, es decir, la suma de **\$110.147.311**, de la que se descontará todo pago que se le haya realizado a la demandante entre estas fechas, por concepto de cancelación de la pensión convencional que gozaba su fallecido esposo y que se le sustituye.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000. Igualmente, se condena en costas a la UGPP a favor de la demandante. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica por EDICTO.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados FRANCISCO ARANGO TORRES, JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ y HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, este último con quien se recompone la Sala, por impedimento aceptado al magistrado JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Hugo Alexander Bedoya Diaz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **6de47af9bd9b22bc2d57cccbe50ded85330acb3b6ce121d571a087686749dfab**
Documento generado en 02/05/2023 03:33:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>